

En dos años termina el contrato de venta de gas a Brasil

El Gobierno debe negociar con privados lo que dejaría de comprar Petrobras y deberá competir con proveedores de LNG

Páginas 2-4



- Cooperativas mineras deben pagar impuestos y regalías por igual (Pág. 5-7)
- La pobreza se redujo en más de 20% desde el año 1997 (Pág. 10-12)
- Los municipios dejarán de recibir recursos HIPC desde 2019 (Pág. 8-9)
- Parroquias y colegios católicos son centros de acopio de pilas (Pág. 18-19)



Nuevo contrato de venta de gas a Brasil tiene como desafío definir otros precios, volúmenes y plazos

Quedan casi dos años más para la conclusión del contrato de venta de gas a Brasil, el principal mercado para Bolivia. El curso de los acontecimientos hace prever que desde el 2020 el país continuará siendo uno de sus proveedores de este energético; pero con otros precios, volúmenes variables, distintos destinatarios y probablemente con plazos más cortos.

Bolivia vende a Brasil el 68% del gas que produce y Brasil compra de Bolivia el 33% que necesita para satisfacer la demanda de sus industrias y de su población.

No obstante, debido a cambios en el contexto mundial, regional y nacional, las condiciones para la negociación de un nuevo contrato no serán las mismas de las pactadas hace 20 años. Hace dos décadas, Bolivia tenía el potencial de reservas, megacampo existentes y en desarrollo, y su ubicación geográfica lo situaba como potencial distribuidor gasífero para países de la región.

En la nueva configuración, algunos cambios determinantes son:

- a) **Nuevos competidores:** Bolivia era el único oferente en la región, hoy también hay ofertas de venta de gas de Trinidad y Tobago, Estados Unidos y, un poco más lejos, Australia. Además, se han desarrollado otras tecnologías como la fractura hidráulica (fracking en inglés) para la extracción de gas natural no convencional como el shale gas, aspecto que ha permitido expandir el mercado del gas natural licuado (LNG por sus siglas en inglés) que es comercializado generalmente mediante barcos, lo que ha facilitado el transporte desde distintos puntos del mundo consolidando una de las principales ventajas de este energético como es la flexibilidad de volúmenes entregados. Hay nuevas tecnologías y mayor competencia.
- b) **Nuevas rutas:** Países y empresas productoras han contribuido a ampliar el Canal de Panamá para que barcos con gas natural puedan atravesar el canal interoceánico abaratando costos, esto

permite que países como Chile puedan beneficiarse con mayores volúmenes de LNG y a mejores precios que los actuales.

- c) **Dimensión del gasoducto:** Bolivia tiene sólo dos ductos para la exportación de gas natural, uno a Brasil y otro a Argentina, con un diámetro fijo que limita la capacidad de exportar mayores volúmenes, mientras aumenta la disponibilidad de los barcos metaneros en el mundo.
- d) **Precios competitivos:** El país tiene una oferta que sigue siendo competitiva en relación a otros oferentes; sin embargo hay otros precios de referencia para el gas, como el Henry Hub de Estados Unidos y el del LNG, entre otros. Es importante considerar que la industria mundial del LNG está realizando cuantiosas inversiones para abaratar sus costos a fin de ofrecer un menor precio a sus compradores.

IMPORTANCIA DEL GAS BOLIVIANO PARA BRASIL

La economía brasileira es la más importante de Sudamérica y ha estado en constante crecimiento, lo que ha implicado, en los últimos 15 años, un mayor consumo de energía para dinamizar su aparato productivo y, adicionalmente, abastecer a una creciente población.

Este incremento en el consumo de gas natural en el mercado brasileiro ha presionado a ese país para aumentar su producción gasífera y también a requerir mayores importaciones, tanto de Bolivia como de otros proveedores. En promedio, el gas boliviano representa cerca de 33% del gas natural consumido en Brasil durante los últimos 14 años.

COMPRADORES BRASILEROS

En agosto de este año surgió un trascendido político en Brasil, publicado por la prensa de ese país, en sentido de que en el nuevo contrato a ser negociado entre Bolivia y Brasil, la estatal Petrobras podría reducir la cantidad requerida de gas natural boliviano a la mitad de lo que actualmente se le provee. Esto no significa que no se venderá la otra mitad; pero es altamente probable que YPF deba negociar la compra-venta de esa porción restante con empresas privadas en el lado brasileiro; es decir, ya no de Estado a Estado.

Este aspecto puede constituirse en una oportunidad si YPF logra ingresar mediante alguna licitación a operar en Brasil como cargador, de esa forma podría ser un actor que demande gas natural a Bolivia desde el otro lado de la frontera.

Sin embargo, también supone algunos riesgos:

Volúmenes variables: Los compradores actualmente prefieren contratos con cantidades flexibles (pueden ser unas para verano y otras para invierno) o incluso interrumpidas en el tiempo, aspecto que resulta más fácil con el LNG que es comercializado mediante barcos, y permite a los países evitar cláusulas “take or pay” que les obliguen a pagar por cantidades fijas.

Plazos variables: La negociación con Petrobras Brasil y además con actores privados, principalmente termoeléctricas, puede implicar plazos distintos entre un contrato y otro, aspecto que incide en una menor estabilidad de ingresos fiscales por concepto de regalías e IDH.

Precios variables: Actualmente existen referencias para el gas natural que no había hace 20 años atrás, un ejemplo es el LNG o incluso el Henry Hub que ha cobrado mayor importancia, estos aspectos podrían afectar el precio actual al que exporta Bolivia.

Distintos interlocutores: La posibilidad de negociar con privados implica que éstos pueden responder a otros intereses, lejanos en muchos casos de la integración energética, masificación del uso del gas natural en clases empobrecidas y otras que pueden dificultar la gestión sectorial.

Estos riesgos y variables podrían dejar atrás la época del superciclo del gas con ingresos estables, producto de un contrato que garantizó estabilidad de volumen, precio y tiempo.

Debido a que estos cambios pueden tener implicancias fiscales, fundamentalmente en la captación de regalías e Impuesto Directo a los Hidrocarburos, debe ser debatido también en el ámbito nacional con los distintos beneficiarios de la renta petrolera, pero en especial con la población boliviana que es la dueña de los recursos hidrocarburíferos.

BRASIL HA SIDO UN MERCADO CLAVE PARA BOLIVIA

De los hidrocarburos producidos en Bolivia, 80% corresponde a gas natural. En los últimos cinco años, la extracción de este recurso energético se ha intensificado.

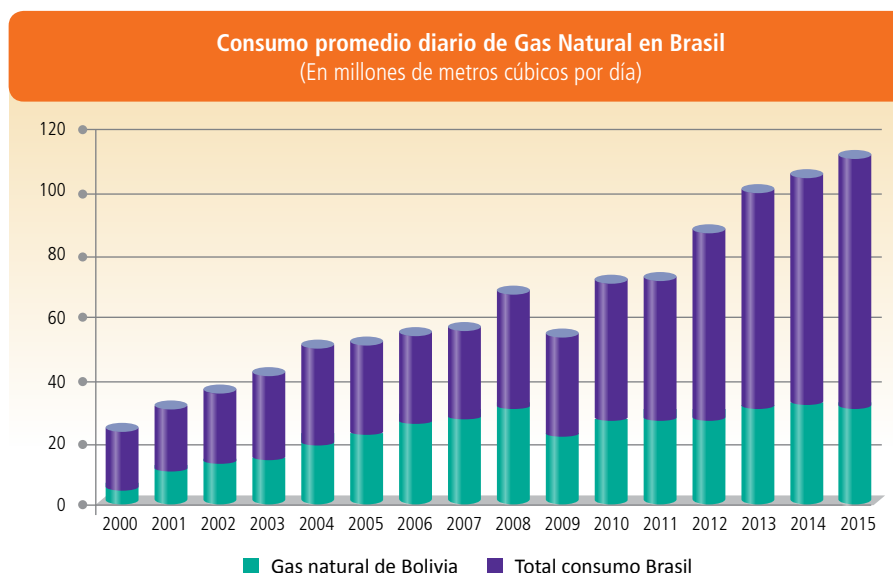
El principal destino del gas natural producido en Bolivia es el mercado de Brasil, el cual representa, en promedio, cerca de 68% del volumen comercializado de gas natural en los últimos 15 años. Sin embargo, de acuerdo con la normativa nacional, el primer mercado que debe ser abastecido de manera prioritaria es el interno, luego los excedentes son exportados por orden de prioridad: primero Brasil y después Argentina¹.

CONSTRUCCIÓN DEL GASODUCTO

El contrato de compra-venta de gas natural suscrito entre Bolivia y Brasil puede ser considerado como resultado de una política de Estado orientada a exportar gas natural al vecino país. Fueron varios gobiernos, en ambos países, que desde 1974 desarrollaron diferentes procesos de negociación para cumplir este objetivo, siendo uno de los más desafiantes el financiamiento y construcción del gasoducto para transportar el energético.

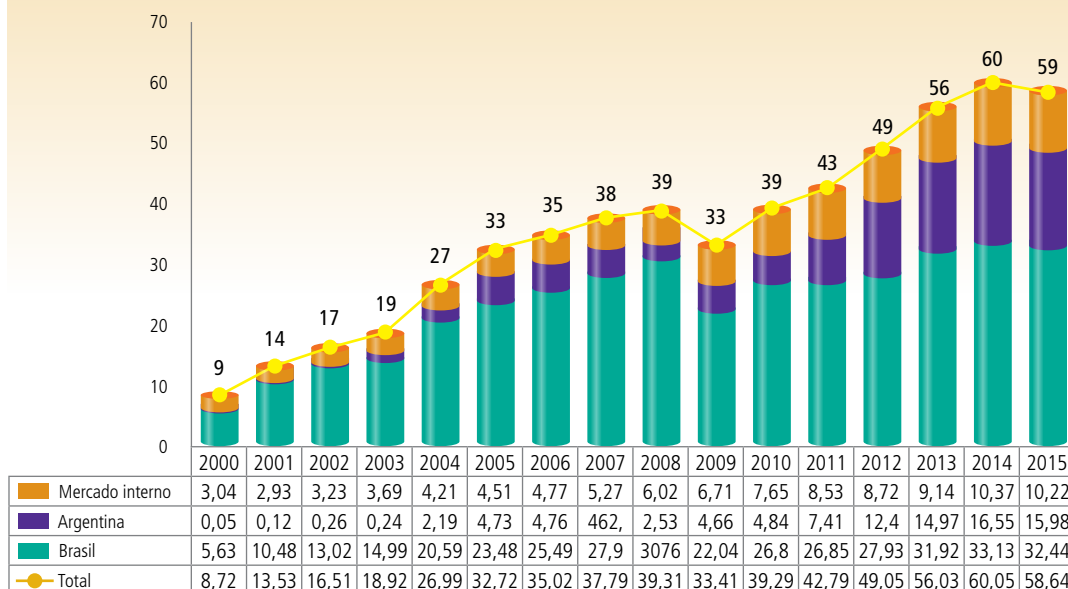
La construcción del gasoducto se inició en 1996, con una extensión de 3.150 kilómetros, a un costo próximo a los 2.000 millones de dólares que fueron financiados principalmente por Petrobras Brasil, mediante aportes de socios y créditos contraídos con el Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo. Del lado boliviano, el gasoducto tiene una longitud de 557 kilómetros, en tanto que la mayor extensión está en el lado brasileiro, en aproximadamente 2.593 kilómetros.

¹ Ministerio de Hidrocarburos y Energía, Resolución Ministerial N° 255 del año 2006, artículo 5.



Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2015

Volúmenes comercializados de Gas Natural (En millones de metros cúbico por día)



FUENTE: YPFB, MHE

Una vez terminado el gasoducto, el contrato de compra-venta de gas natural (Gas Supply Agreement – GSA) entró en vigencia desde el año 1999 por un plazo de 20 años, próximo a finalizar el año 2019.

El contrato que fenece en poco más de dos años ha permitido al país la mayor estabilidad y beneficio en términos fiscales; por lo tanto, a futuro se plantean importantes desafíos frente a un proceso de renegociación que permita un nuevo contrato de exportación.

Inicialmente, el contrato GSA estableció un volumen de compra-venta de 16 MMmcd, el cual posteriormente fue incrementado a 24 MMmcd mediante una primera adenda; posteriormente, producto de una segunda adenda se incrementó a los actuales 30,08 MMmcd.

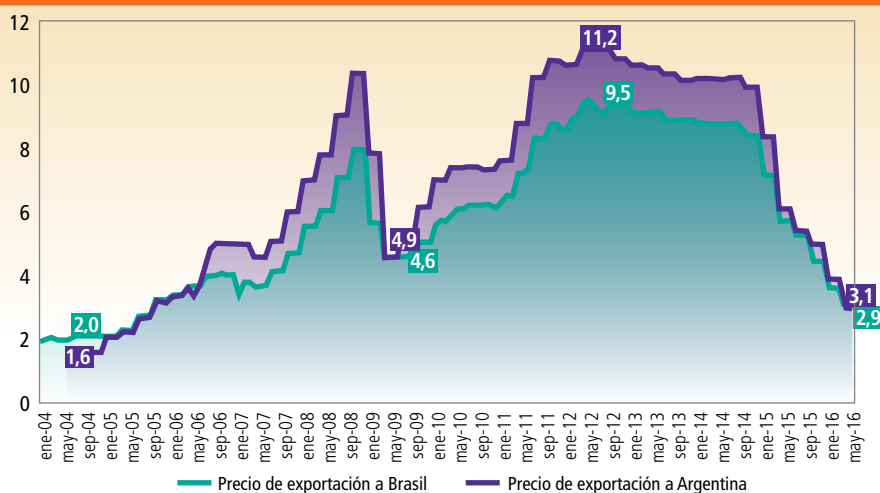
Adicionalmente, el contrato establece que Bolivia deberá suministrar en el punto de entrega todo el gas combustible necesario para la operación con-

tinua de las estaciones de compresión del gasoducto en Brasil (equivalente a 1,5 MMmcd); siendo este volumen pagado por Petrobras Brasil.

Uno de los aspectos de mayor interés en el contrato con Brasil y que ha tenido un efecto significativo en los ingresos fiscales percibidos por Bolivia en los últimos 10 años es el precio de exportación del gas natural, el cual está vinculado al precio internacional del barril de petróleo (mediante una canasta de 3 combustibles).

Esto implica que cuando el precio internacional del petróleo se ha incrementado, como sucedió entre los años 2004–2014, el precio de exportación del gas natural boliviano también se ha incrementado. Posteriormente, debido a la caída del precio internacional del petróleo, desde agosto de 2014, el precio de exportación del gas natural boliviano también ha bajado.

Precio de exportación del gas natural boliviano (\$us/MMBTU)





Cooperativas auríferas deben pagar impuestos a las utilidades y regalías por igual

Los cooperativistas mineros tienen como fuente de ingreso la explotación de recursos no renovables que pertenecen a todos los bolivianos y bolivianas, actividad por la que pagan regalías mínimas, como en el caso del oro, y cero impuestos a las utilidades.

En el caso del oro, muchos trabajadores del subsector realizan esta actividad con ingresos que alcanzan sólo para la sobrevivencia, mientras otros logran ganancias millonarias y, por tanto, deberían pagar una misma tasa de impuestos y regalías que el resto de los operadores.

La regalía es el pago de una compensación a un territorio por la explotación de un recurso no renovable. Se la calcula como un porcentaje del valor bruto de venta del mineral, a ese porcentaje se denomina alícuota de la regalía.

El oro tiene un tratamiento especial. La alícuota está diferenciada en 7% para yacimientos ricos, 5% para medianos y 2,5% para marginales; en tanto que la minería tradicional paga 5% en casos como el zinc, plomo, estaño, wolfram, cobre y otros. Respecto a la plata, la alícuota es de 6% y del litio 3%.

Si se aplica una tasa uniforme de regalía para el oro se podrían adoptar medidas estatales de apoyo, incentivo y compensación más focalizadas para grupos de cooperativistas que realmente exploten en áreas marginales.

PODER POLÍTICO Y ECONÓMICO

Después de los violentos conflictos entre Gobierno y cooperativistas mineros se aprobaron algunos decretos —que luego fueron elevados a rango de ley— y una resolución con la intención de ordenar y regularizar el funcionamiento de las cooperativas, algunas difícilmente aplicables.

En los antecedentes, el subsector cooperativo de la minería alcanzó un alto nivel de poder, particularmente en la última década. En el ámbito político, los cooperativistas lograron que el primer Ministro de Minería de la gestión del presidente Evo Morales fuera uno de sus afiliados, se

creó un Viceministerio de Cooperativas Mineras y adicionalmente una dirección en la empresa estatal, a su favor; consiguieron dos cargos en el directorio de COMIBOL; además, cuentan con un senador y cuatro diputados que ayudan al MAS a tener dos tercios en el Parlamento. El sector participó, desde adentro, en la redacción de la Constitución y de la Ley de Minería y Metalurgia.

En lo económico, se constitucionalizó su carácter de entidades sin fines de lucro —por tanto, no pagan impuestos a las utilidades— y, en el caso del oro, se les redujo las regalías de 7% a 2,5% del valor de ventas brutas (en el caso en que la venta del oro sea dentro del país, el porcentaje baja a 1,5%).

También se creó una comercializadora de minerales para dar más seguridad a la venta de la producción de las cooperativas y se creó un fondo de fomento para que accedan a créditos.

Pese a que la Ley de Medio Ambiente exige que los operadores mineros tengan licencia ambiental para realizar sus actividades, sólo 15,2% de las cooperativas cuentan con ella; no se aplican medidas de control medioambiental, lo que también supone beneficios económicos, incluso a costa del deterioro de la tierra, el aire y el agua.

Tienen a su favor haberse constituido, después de la relocalización de mineros en 1986, en una importante fuente de generación de empleo; sin embargo, precario, sin derechos laborales e incluso de autoexplotación.

CONFLICTO

Uno de los puntos más críticos que se manifestó en el violento conflicto de este año está referido a la firma de contratos entre cooperativas mineras con empresas transnacionales. Las cooperativas aprovecharon todas las ventajas políticas y económicas para dejar mínimos beneficios

al Estado y compartieron ganancias con consorcios extranjeros, los que trajeron maquinarias e inversiones para intensificar la explotación de estos recursos naturales.

Tras el conflicto que cobró la vida de seis personas, se pusieron en vigencia nuevas normas. El primero de los decretos emitidos el 1 de septiembre, ratificando lo que establece la norma, determina la reversión de las áreas de las cooperativas que hubieran firmado contratos con empresas privadas.

Aproximadamente, 50 cooperativas podrían estar afectadas por esta medida. Su aplicación es posible, pero traerá dificultades; de hecho, una parte de las causas de la última crisis es ésta. Las áreas revertidas han estado generando grandes y significativas utilidades no compartidas con el pueblo boliviano.

Otro decreto estipula la sindicalización y registro de las personas que trabajan en las cooperativas. Ésta es otra norma que tendrá dificultades en su cumplimiento, porque los/as trabajadores/as de las cooperativas son gente allegada al cooperativista; sindicalizarse sería denunciar la irregularidad de la cooperativa que está prohibida de contratar trabajadores; es decir, sindicalizarse significaría una virtual pérdida de su trabajo.

Otra norma determina la regularización de las cooperativas con la presentación de balances, registros de compras, distribución de los excedentes y otros detalles lógicos. Este decreto también tendrá dificultades en su aplicación porque muy pocas son cooperativas reales, la mayoría no tiene registro ni control de sus costos; trabajan y comercian individualmente.

Para evitar el aumento de cooperativas se deben generar empleos alternativos en cantidades que el país no puede crear. Algunos nuevos empleos pueden lograrse con procesos de adición de valor en el sector minero.

Entonces, ¿por qué detener el aumento del número de cooperativas? Dos razones, la primera, de carácter laboral, porque en el seno de estas organizaciones se ha dado un proceso de explotación de seres humanos al margen de toda norma nacional; la segunda, porque ya no hay espacios como los que requieren las cooperativas para que ellas puedan operar.

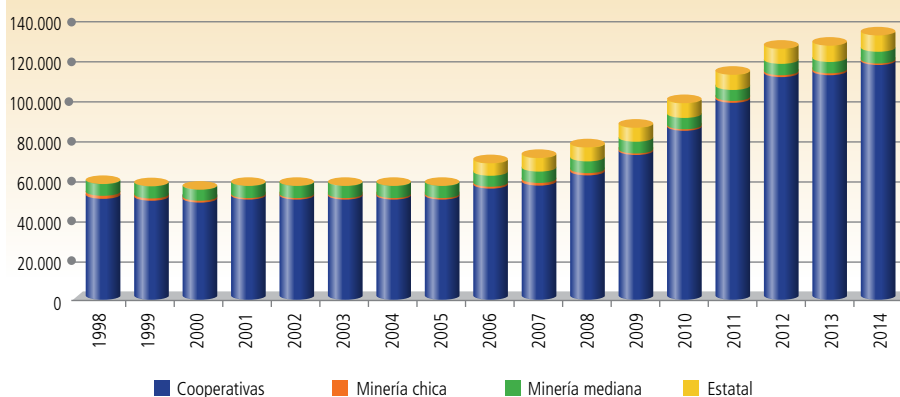
Para que las cooperativas no abusen del Estado apropiándose de los excedentes que surgen como resultado de precios altos de metales no basta con prohibir la asociación con privados ni instruir la sindicalización de sus trabajadores.

En este punto hay dos salidas: o bien obligar a las cooperativas, aquellas que tengan altos excedentes, a convertirse en empresas o bien lograr la regularización de las cooperativas y cobrar impuestos a las utilidades a todas.

Esta medida puede parecer impracticable; pero es posible demostrar que la gran mayoría de cooperativas genera excedentes que apenas alcanzan para que los socios vivan dignamente y, por tanto, no pagarían impuestos, es decir, la mayoría no se vería afectada.

Respecto al control de la producción aurífera para acceder a una regalía menor, el Estado tiene limitaciones para verificar o determinar si los yacimientos que acceden a ese beneficio son o no marginales. Para superar esta anomalía, debe eliminarse esta discriminación, manteniendo el mismo nivel para todos los tipos de yacimientos y generando un



GRÁFICO: Evolución del número de trabajadores ligados al sector minero

Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia

mecanismo de compensación para las cooperativas que no obtengan los excedentes suficientes para garantizar un margen de ingresos para los cooperativistas.

Una alternativa es que las cooperativas tomen el nombre de lo que realmente son: locatarios. Podrían ser locatarios de la COMIBOL y que esta empresa asuma responsabilidades técnicas, sociales, industriales y otras, que hagan más digna la vida laboral de estas personas.

TRABAJADORES DEL SECTOR

No se conoce con certeza el número total de cooperativas y la cantidad de socios y no socios que trabajan en ellas. El año 2010, el Gobierno, dentro del programa APEMIN, llevó a cabo un censo de las cooperativas mineras; pero los vacíos de información no permiten sacar conclusiones seguras.

El año 2015, el Viceministro de Cooperativas Mineras aseguró que había 1.664 cooperativas con 119.069 socios; pero el Ministro de Gobierno, en agosto de 2016, afirmó que sólo había 64.000 socios.

Esta incertidumbre tiene sus razones. Al subsector cooperativo le interesa mostrarse como muy grande y numeroso, para aumentar su poder de negociación con el Gobierno y así conseguir mayores beneficios. Por otra parte, la ley prohíbe a las cooperativas tener trabajadores que no sean socios (salvo asesoramiento técnico y apoyo administrativo); pero, investigaciones llevadas a cabo en el Cerro Rico y en las cooperativas auríferas de La Paz, por ONG prestigiosas, muestran que sí hay personas no socias que trabajan en las cooperativas y que hay socios que, sin trabajar, reciben beneficios gracias al trabajo de otras personas.

No obstante, la cantidad de cooperativas creció a gran velocidad desde 2006 y el número de socios se incrementó en gran medida (ver gráfico). Esto ocurrió, sobre todo, porque mucha gente, desempleada o subempleada, fue atraída por la minería aurífera para lograr niveles de ingresos acordes a sus ambiciones personales.

SECTOR AURÍFERO, TRATO ESPECIAL

La razón por la que la mayor parte de las últimas cooperativas es aurífera es que los yacimientos aluviales son explotables sin grandes inversiones ni preparación. En cambio, un yacimiento subterráneo exige exploración, preparación y desarrollo de la mina, además de la instalación o alquiler de una planta de procesamiento. Todo esto cuesta mucho y toma varios

años. Por esto, muy pocas veces las cooperativas pueden acceder a ese tipo de yacimientos.

El oro que se encuentra en los lechos de los ríos o en entornos cercanos puede ser recuperado, sin cavar, a mano o con equipos sencillos y con ayuda de mercurio. Estos depósitos auríferos pueden ser explotados sin exploración, sin desarrollo, sin preparación y sin necesidad de sofisticadas plantas de procesamiento; además, el oro ya está en estado metálico.

Las pocas que se dedicaron a extraer otros minerales ingresaron a minas abandonadas o se asociaron a empresas privadas que podían invertir tiempo y dinero para hacer operaciones rentables.

POLÍTICAS PÚBLICAS

El sector minero ha tenido muy pocas ocasiones de formarse en centros de capacitación especializados. Desde hace siglos, los mineros antiguos han formado a los nuevos, con métodos improvisados y poco ortodoxos; pero efectivos. Sin embargo, con el gran crecimiento del número de trabajadores del sector, el sistema de autoformación ha colapsado y hay mucha gente operando sin tener las competencias para hacerlo, poniéndose en riesgo y deteriorando el medio ambiente.

Los yacimientos de oro aluviales conocidos no son infinitos y la demanda creciente de espacios donde trabajar, sumada a la casi inexistente exploración para identificar áreas nuevas, difícilmente puede ser satisfecha.

Los espacios para hacer minería tradicional sólo pueden ser minas abandonadas o avasalladas porque las cooperativas no tienen ni el capital ni la formación técnica ni el tiempo para preparar espacios nuevos. El Gobierno intentó generar áreas para las cooperativas, revirtiendo minas abandonadas que estuvieran en manos privadas; pero esta posibilidad tampoco es infinita.

Si el Gobierno decidiese explorar buscando yacimientos nuevos y los preparase para entregarlos a las cooperativas estaría provocando un daño económico al Estado porque si fuera una empresa la que explotare ese depósito pagaría impuestos sobre sus utilidades, lo que no sucedería con las cooperativas.

Las limitaciones del país para generar nuevos empleos, el agotamiento de áreas adecuadas a las cooperativas y la ambición de empresarios y de cooperativistas inescrupulosos han desencadenado una crisis todavía sin solución.

El año 2019 concluye la transferencia de recursos HIPC para los municipios



Los recursos de la iniciativa HIPC II, que benefician a los municipios, comienzan a reducirse y se estima que esta tendencia continúe hasta su culminación, en aproximadamente tres años.

Estos recursos fueron distribuidos desde el 2001 a todos los municipios del país en el marco de los resultados del Diálogo 2000. Como resultado de programas de condonación de deuda externa, el Estado dejó de pagar a sus acreedores; con la condición de que esos recursos contribuyan a aliviar la pobreza.

PAÍS POBRE Y ENDEUDADO

En los años 90, Bolivia se caracterizaba por ser país pobre y altamente endeudado, con esos criterios accedió a esta iniciativa de condonación de deuda; pero también porque hasta ese momento tenía una trayectoria de 15 años de aplicación de los programas de ajuste estructural del FMI y del Banco Mundial.

Bolivia tenía un Producto Interno Bruto per cápita por debajo de 1.000 dólares, considerado como país de ingreso bajo, según la clasificación del Banco Mundial. El índice de pobreza era de 64% y la población extremadamente pobre alcanzaba a 38%.

La deuda era insostenible —según los criterios del coeficiente de deuda externa, en términos de valor presente neto sobre exportación de bienes y servicios, llegó a 305% el año 1997— sobrepasando el coeficiente objetivo de 225%.

Ante esta situación, similar a la de otros tres países de la región y de más de 30 países africanos, surgió la Iniciativa HIPC (Heavily Indebted Poor Countries, Países Pobres Muy Endeudados - PPME en español), implementada por el FMI y Banco Mundial.

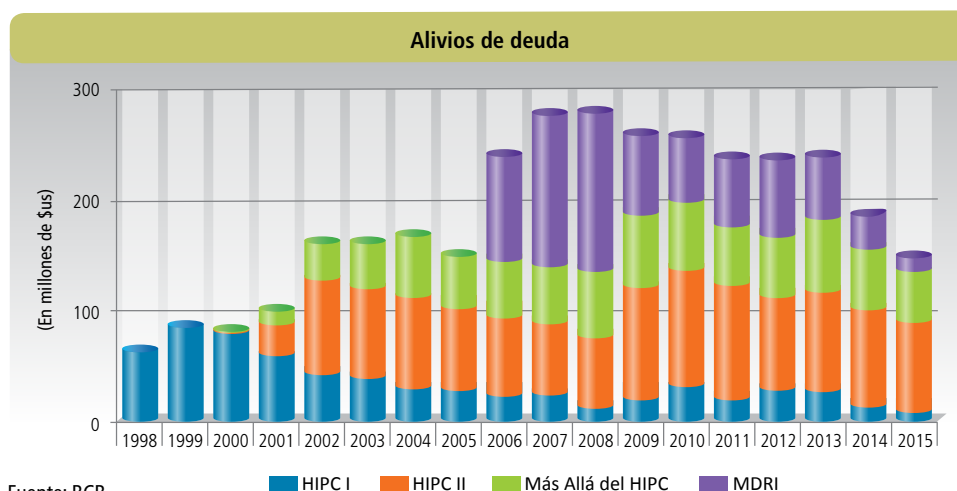
El objetivo de la iniciativa HIPC fue ayudar a los países beneficiarios a alcanzar una situación de deuda sostenible a largo plazo, aplicando dos elementos relativos a la reducción de la carga de endeudamiento: i) la adopción de programas de ajuste y reforma y ii) el reparto equitativo del esfuerzo entre todos los acreedores: bilaterales oficiales, multilaterales y comerciales.

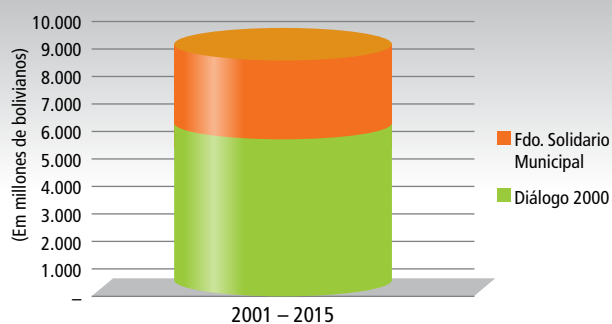
MENOR PAGO DE DEUDA

La condonación o alivio de deuda significó liberar recursos para que Bolivia, en lugar de pagar el servicio de su deuda, destine esos recursos a otros gastos. La condonación se aplicó a determinados créditos, en su mayoría concesionales, es decir, aquellos que tenían bajos intereses y largos plazos de pago.

La iniciativa HIPC tuvo varias fases, Bolivia implementó todas ellas, denominadas HIPC I, HIPC II y Más allá del HIPC. Posteriormente, ingresó a la última condonación implementada, denominada Iniciativa de Alivio de Deuda Multilateral (MDRI, por sus siglas en inglés).

El servicio de deuda se redujo a raíz de la condonación, habiendo liberado recursos por 2.234 millones de dólares entre 1998 y 2015, en el marco



Distribución alivio deuda HIPC II, 2001-2015

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

de todas las iniciativas, y el HIPC II representó la mayor porción de todo el alivio, con una estimación de 34% de los montos hasta ahora condonados.

DESTINO DEL HIPC II

Los recursos liberados significaron principalmente un apoyo presupuestario, contribuyeron a reducir el déficit que tuvo el país hasta mediados de la década del 2000; sin embargo, al no ser desde su inicio un gasto vinculado con sectores específicos, se definió darle al programa HIPC II un destino concreto.

Con este propósito se llevó a cabo el Diálogo Nacional 2000, que permitió la deliberación entre la sociedad y el Estado para acordar elementos centrales que definan el camino hacia una estrategia de lucha contra la pobreza, cuyos resultados y conclusiones fueron importantes insumos para la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP), proceso al que contribuyeron también otros espacios participativos en el país, como fue la experiencia del Foro Jubileo.

La Ley del Diálogo Nacional recogió las propuestas y formalizó los principales acuerdos alcanzados:

- Designar a los gobiernos municipales como el principal mecanismo de distribución y administración de los recursos HIPC y otorgar más recursos a los municipios más pobres.
- Crear un mecanismo de control social

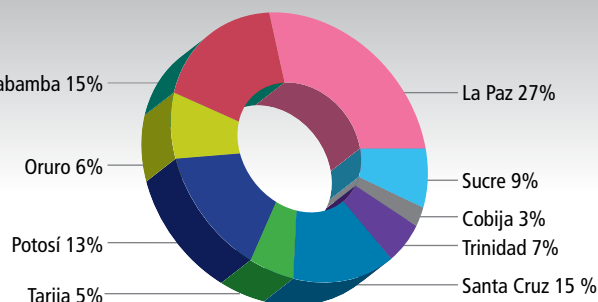
Para su implementación, se creó el Fondo Solidario Municipal para la Educación Escolar y Salud Públicas con el objeto de cubrir el déficit de ítems del personal docente de educación escolar pública y del personal médico y paramédico del servicio de salud pública, acumulados hasta el año 2001; y se creó la Cuenta Especial Diálogo 2000 para depositar los recursos que el Estado dejaría de pagar a los acreedores por efecto del alivio de la deuda externa, en el marco del HIPC II.

Se estableció que la distribución de los recursos en los municipios fuera de la siguiente manera:

- 20% para mejoramiento de la calidad de servicios de educación escolar pública.
- 10% para mejoramiento de la calidad de los servicios de salud pública.
- 70% para programas municipales de obras en infraestructura productiva y social.

En el periodo 2001-2015, la cuenta Diálogo 2000 (destinada a municipios) recibió aproximadamente 6.300 millones de bolivianos y el Fondo Solidario (ítems salud y educación) 2.300 millones de bolivianos.

Sumando los recursos HIPC II transferidos a los municipios de cada departamento, la asignación muestra que los departamentos de La Paz,

Desembolso por departamento

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Cochabamba, Santa Cruz y Potosí fueron los que mayores desembolsos recibieron, con base en los criterios de pobreza.

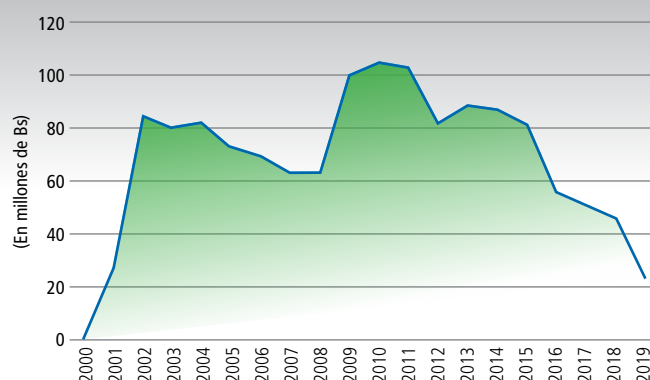
PROYECCIONES HIPC II

El alivio de deuda se registra y aplica según el cronograma de pagos que el Estado había pactado con los acreedores de la deuda, con el mismo plazo de vencimiento de los créditos que fueron sujetos del alivio HIPC II. La fecha de conclusión está próxima y, por tanto, la liberación de recursos bajo esta iniciativa llegará a su fin.

Según las proyecciones estimadas, el 2019 será el último año del HIPC II, de modo que los municipios ya no recibirán esos recursos de la cuenta Diálogo 2000 ni de financiamiento del fondo solidario.

Para los municipios y sectores beneficiarios del HIPC II, a esta situación se suma la caída —como muestra el presupuesto 2016— de recursos que reciben los gobiernos municipales. Esta tendencia continuaría en los siguientes años si el precio del petróleo permanece en niveles bajos, y según los resultados de las renegociaciones de los contratos por la venta de gas que, en el caso del contrato con Brasil, concluirá el 2019.

Aunque en la última década los desembolsos HIPC II no fueron tan relevantes como las transferencias del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), algunos municipios sentirán más la falta de recursos cuando este programa llegue a su fin. Por tanto, será importante abordar la generación de recursos desde los municipios, así como la sostenibilidad de los ingresos del país, aspectos que pueden ser debatidos en un espacio como el pacto fiscal.

Condonación HIPC II

Nota: De 2016 a 2019 proyectado
Fuente: Banco Central de Bolivia



Indicadores reflejan una **reducción de la pobreza de más de 20%** desde 2007

La pobreza en el país se redujo entre 2007 y 2015, según indicadores oficiales. La pobreza moderada bajó de 60,1% a 38,6% y la pobreza extrema de 37,7% a 16,8%, en los últimos ocho años.

Con datos disponibles para medir los indicadores de pobreza, el año 2015, la población total alcanzaba a 10.881.124 habitantes en el país, de los cuales 4.195.407 son pobres, y de éstos 1.832.817 personas viven en extrema pobreza.

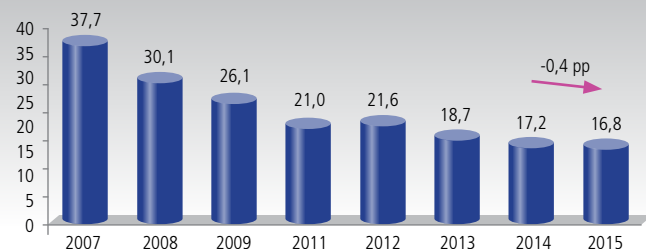
En la gestión 2015, respecto a un año anterior, la pobreza moderada se redujo en 0,6 puntos porcentuales y se revirtió el incremento registrado en 2014, cuando subió en 0,2 puntos porcentuales en comparación a 2013. En cambio, la incidencia de pobreza extrema continuó en descenso y el último año redujo en 0,4 puntos porcentuales.

Bolivia: Evolución de la incidencia de pobreza moderada
(En porcentaje)

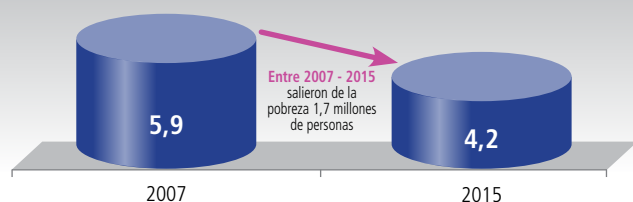


FUENTE: Elaboración propia con datos de UDAPE - INE

Bolivia: Evolución de la incidencia de la pobreza extrema
(En porcentaje)

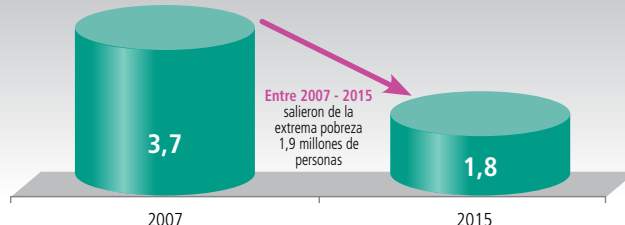


Bolivia: Número de personas en situación de pobreza
(En millones)



FUENTE: Elaboración propia con datos INE

Bolivia: Número de personas en situación de pobreza extrema
(En millones)



En el país, la pobreza se calcula anualmente de acuerdo a la línea de pobreza moderada y la línea de pobreza extrema o indigencia.

- En la línea de pobreza moderada se calcula el ingreso mínimo requerido para adquirir alimentos, bienes y servicios considerados esenciales para vivir.
- En la línea de indigencia o pobreza extrema se calcula el ingreso mínimo requerido para satisfacer un consumo básico de alimentos que cubra las necesidades nutricionales mínimas de una persona.

MÁS POBREZA URBANA, MENOS POBREZA RURAL

La imagen tradicional de la población boliviana en situación de pobreza tenía rostro rural, pero en la última década este cuadro ha ido cambiando.

En términos de porcentaje, 55% de la población rural aún está en esa situación de pobreza; sin embargo, en cantidad de personas, el número de pobres es mayor y creciente en áreas urbanas (alrededor de 2,3 millones de personas), principalmente por la migración campo-ciudad.

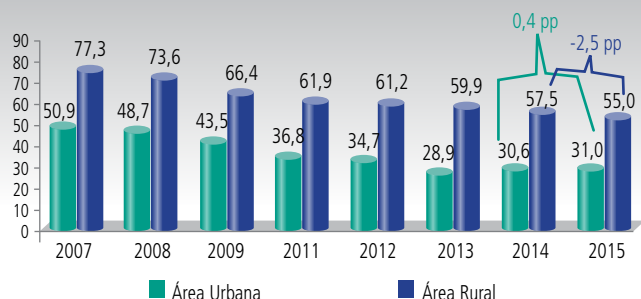
Los pobres extremos son el otro grupo que compone a la población pobre, ellos representan en el área rural el 33,3% de su población, según datos a 2015. La tendencia de reducción de este grupo continúa y en el último año se habría reducido en 2,8 puntos porcentuales.

En el área urbana la situación no es la misma, entre los años 2014 y 2015, tanto la pobreza moderada como la pobreza extrema crecieron: la primera en 0,4 puntos porcentuales y la segunda en 1 punto porcentual.

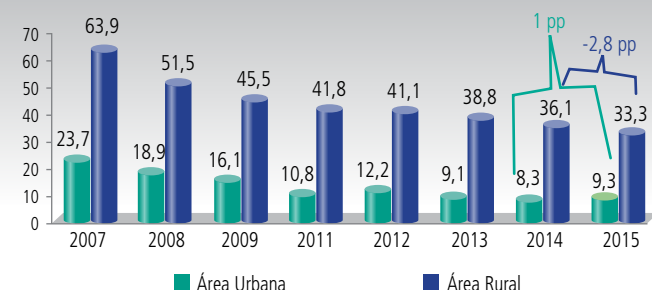
Hasta el año 2013, la pobreza urbana había descendido hasta 28,9%, el nivel histórico más bajo, pero el año 2014 subió a 30,6% y el 2015 continuó aumentando hasta llegar a 31%.

Respecto a la pobreza extrema en el área urbana, ésta llegó a 9,3% en 2015, y subió en comparación a un año anterior, cuando se registró 8,3%.

Bolivia: Evolución de la pobreza moderada según área geográfica
(En porcentaje)



Bolivia: Evolución de la pobreza extrema según área geográfica
(En porcentaje)

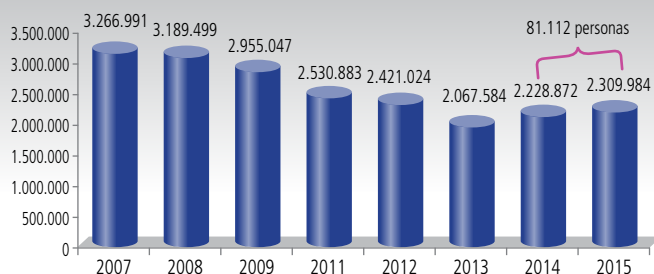


POBREZA URBANA

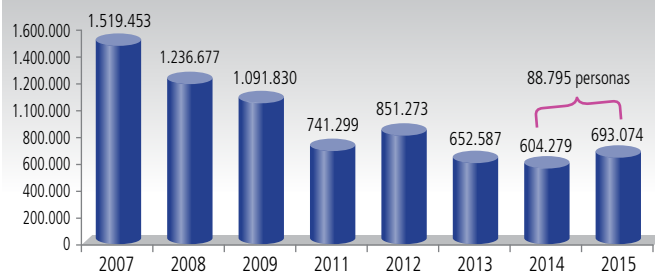
El año 2015, el porcentaje de pobres que habitan en el área urbana fue de 31% de su población, lo que significa que había más de 2,3 millones de personas en esta condición. Con estos datos se puede inferir que en el área urbana se han incrementado 81.112 personas pobres.

En la zona urbana, la incidencia de la pobreza extrema se incrementó entre 2014 y 2015, en 88.795 personas. De acuerdo a cifras oficiales, existen 693.074 personas en situación de indigencia.

Bolivia: Área urbana número de personas en situación de pobreza moderada



Bolivia: Área urbana número de personas en situación de extrema pobreza



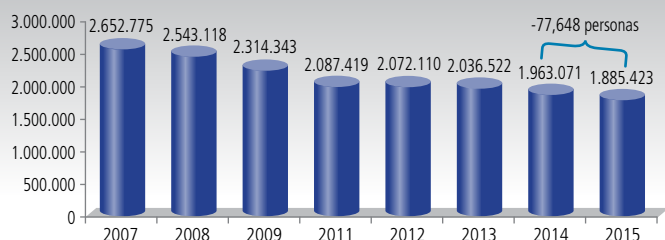


POBREZA RURAL

Entre 2014 y 2015, en el área rural el número de personas que salieron de la extrema pobreza fue de 92.359 personas; pese a los esfuerzos, todavía existen 1,1 millones de personas que no logran cubrir el costo de una canasta básica de alimentos.

En áreas rurales, la reducción de la pobreza es notable. En los últimos siete años, más de la mitad de esta población salió de esta condición, aunque el porcentaje todavía es elevado en comparación al área urbana.

Bolivia: Área rural número de personas en situación de pobreza moderada



Bolivia: Área rural número de personas en situación de extrema pobreza



COMPORTAMIENTO DEMOGRÁFICO Y POBREZA

En las dos últimas gestiones se observa un incremento de la pobreza en el área urbana, lo cual genera y enfrenta un serio problema, producto de las migraciones de la población rural a las ciudades, cada vez más frecuente y en mayor escala.

La migración de habitantes rurales trajo como consecuencia nuevos procesos de empobrecimiento. Hasta 2016, con base en proyecciones demográficas, del total de la población boliviana, 68,7% personas viven en el área urbana y 31,3% en área rural.

Según el último informe nacional de desarrollo humano, para evitar esta situación en las áreas urbanas, principalmente en las metrópolis, se deben proponer políticas integrales en el marco del desarrollo humano que al menos se centren en tres ejes i) oportunidades económicas y medios de vida ii) vivienda con servicios de calidad y espacios públicos y iii) seguridad ciudadana.

El primer eje está muy relacionado al tema de mejorar los indicadores de pobreza presentados en este artículo, ya que se requiere mejorar los ingresos de la población en aspectos relativos a la promoción de empleos de calidad.

Por otra parte, considerando las proyecciones para el 2030, el país tendrá 13,3 millones de habitantes y la densidad poblacional será de 10 habitantes por Km².

Por la relación estrecha entre el comportamiento demográfico de crecimiento poblacional y urbanización actual del país y los niveles de pobreza, estas cifras advierten que se debe poner mayor atención en la medida en que pueden producir nuevas vulnerabilidades en el futuro, relacionadas especialmente a situaciones de exclusión, ocasionadas por desigualdades, que limiten su capacidad de inserción social y productiva.

Tributar según la capacidad económica, calcular costos y priorizar sectores son tareas para el Pacto Fiscal

El proceso de Pacto Fiscal ha tomado un giro y, finalmente, se activa con un cronograma corto frente a la complejidad de los temas que deben ser abordados para diseñar una nueva arquitectura fiscal que permita orientar los recursos públicos hacia un desarrollo más equitativo y sostenible.

Algunos temas fundamentales que deberían ser resueltos son la ampliación del universo tributario, en el marco de las autonomías, para generar nuevos ingresos fiscales, el costeo de competencias o cálculo de costos para definir cómo deberían distribuirse los recursos y la priorización de los sectores a los que se destinarán para atender las necesidades de la población.

El Pacto Fiscal fue postergado por varios años. El Consejo Nacional de Autonomías definió cinco etapas hasta su conclusión en julio de 2017.

Lamentablemente, esta apertura para tratar el Pacto Fiscal se da cuando ya ha finalizado el periodo denominado de bonanza económica y con un Estado que en sus diferentes niveles afrontan la inminente caída de ingresos.

El Pacto Fiscal debía ser abordado como parte del proceso constituyente. Éste hubiera podido ser un espacio para concertar —en un marco de planificación— el uso de los grandes y crecientes recursos que se recaudaron por concepto de la renta extractiva (principalmente hidrocarburos), hacia cambios estructurales, como una apuesta de desarrollo diversificado.

Pasada la época de la bonanza se puede evaluar, en general, que estos recursos han sido dispersados en diferentes gastos e inversiones, y si bien en su momento han permitido dinamizar la economía, al parecer, habría tenido un efecto momentáneo, sin sostenibilidad en el tiempo.

Ahora se aborda un Pacto Fiscal con unas finanzas públicas en déficit, lo que reduce las perspectivas de este proceso como un espacio para reorientar los recursos públicos hacia cambios estructurales en el patrón de desarrollo.

No obstante, aún este proceso puede coadyuvar a una mayor generación de ingresos públicos y, por tanto, a darle mayor sostenibilidad a las finanzas públicas, una optimización del uso de los recursos, reducir las inequidades, y dar cumplimiento a diferentes mandatos constitucionales.

Idealmente, el proceso del Pacto Fiscal debería implicar una nueva construcción de todos los elementos que hacen a la arquitectura fiscal, es decir la generación de ingresos, la distribución y el uso de los recursos públicos, y otros; sin embargo los alcances de este proceso dependerán de la voluntad política que se tenga, y ahora con un cronograma estrecho.

PROPUESTAS

Inicialmente, la demanda de los gobiernos subnacionales, principalmente gobernaciones, por una mayor asignación de recursos, es el tema que actualmente ha activado el debate sobre el Pacto Fiscal.

Los ingresos subnacionales pueden ser tratados por dos vías: a través de la redistribución de los recursos públicos —con una nueva coparticipación— o vía creación o transferencias de impuestos hacia los gobiernos subnacionales, en el marco de las autonomías.

Distribución con costeo de competencias

Con relación a la distribución de los recursos, tanto vertical, entre los diferentes niveles de gobierno; como horizontal, entre las regiones del país, éste es un tema bastante complicado, pero es fundamental, al menos, abrir el análisis y la discusión.

¿Con qué base se debería redistribuir? Los recursos públicos que capta el Estado tienen como finalidad la provisión de bienes y servicios públicos por parte de los diferentes niveles de gobierno, en el marco de sus competencias, por tanto, el objetivo de distribuir los recursos no es el potenciamiento del nivel central o de la gobernación o del municipio.

Considerando que la transferencia y delegación de competencias requiere un cálculo de costos competenciales y análisis de las transferencias de recursos correspondientes de acuerdo con la Ley Marco de Autonomías, la distribución inicial de recursos debería seguir esa misma lógica.

Al efecto, el análisis de la distribución debería partir de un costeo de competencias, las cuales, en general, ya han sido definidas para cada nivel de gobierno (en la Constitución Política del Estado, Ley Marco de



Autonomías y otras normas); consecuentemente, la distribución sería el resultado de este costeo de competencias (es decir, de acuerdo a los montos necesarios para ejercer sus competencias)

El costeo debería realizarse identificando claramente las competencias que implican gastos corrientes y las que se refieren a inversión, puesto que las primeras requerirían de ingresos corrientes o recurrentes en el tiempo, conforme a un principio de sostenibilidad; y los gastos de inversión pueden financiarse, además, con recursos extraordinarios como los provenientes de la renta extractiva.

Si bien un costeo de competencias a un nivel muy detallado sería una tarea demasiado amplia y demoraría mucho, se pueden avanzar con aproximaciones generales. El Gobierno Central, en sus diferentes carteras, y los gobiernos subnacionales deberían tener una idea aproximada del costo de atención o necesidades de inversión en los diferentes sectores, como base para sus procesos de planificación.

El tratar la distribución de recursos con base en un costeo de competencias significa encaminar la construcción de las definiciones fiscales de acuerdo con criterios técnicos en lugar de la discusión política.

Sistema tributario en autonomías

Se propone una reforma en el marco del Estado con autonomías, que incluya la ampliación del universo tributario hacia sectores que actualmente no aportan.

Algunas reformas propuestas son las siguientes:

- Crear un impuesto a las altas rentas personales en favor del nivel departamental. Se recomienda eliminar el RC-IVA. En Bolivia, a diferencia de la mayoría de los países, no existe un impuesto al ingreso personal (el RC-IVA ha sido diseñado y funciona más como un mecanismo de control del IVA). Este impuesto haría cumplir el mandato constitucional referido al deber de tributar en proporción a la capacidad económica. Éste es el instrumento tributario casi único con capacidad redistributiva, y es un impuesto que ayuda a formalizar la economía.
- Transferir el Impuesto al Consumo Específico en favor de las gobernaciones.
- Transferir el Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) a favor de las gobernaciones, como un impuesto al consumo de carburantes.
- Transferir el Impuesto a Juegos de Azar y Promociones al nivel municipal.

Priorizar y atender sectores

Con relación al destino o uso de los recursos públicos, uno de los principales cuestionamientos es cómo hacer política pública que implique la asignación de recursos en un Estado con autonomías.

Los diferentes niveles de Gobierno deciden el uso de sus recursos, por lo que la orientación del gasto y la inversión públicas es resultado de decisiones autónomas de cada uno de los 339 gobiernos municipales, 9 gobernaciones, así como del Nivel Central. Esto limita adoptar políticas de Estado, como por ejemplo el planteamiento del cambio de matriz productiva o la atención a la falta de asignación de recursos para el sector salud.

Se requieren espacios de concertación, como el Pacto Fiscal, para llegar a acuerdos mínimos de priorización en la asignación de recursos a determinados sectores, en especial inversiones productivas hacia una diversificación de la economía y generación de empleo.

Pacto Fiscal participativo

El Pacto Fiscal debería acercar a autoridades y sociedad civil en sentido de generar acuerdos sobre los mecanismos por medio de los cuales la sociedad aporta recursos (tributa) para financiar al Estado, y éste devuelve proporcionado bienes y servicios públicos a la sociedad, no sólo referidos a infraestructura, sino también a la calidad y utilidad de esos bienes y servicios, lo que se constituiría en una renovación del contrato social.

Por otro lado, la Constitución Política del Estado, en su artículo 321, establece que "...la determinación del gasto y de la inversión pública tendrá lugar por medio de mecanismos de participación ciudadana".

Bajo este marco, el Pacto Fiscal debería ser un proceso amplio, plural, participativo y democrático, donde un actor fundamental debería ser la sociedad civil en sus diferentes formas y representaciones; no sólo en etapas como la socialización de la información, sino en los espacios de diálogo y toma de decisiones o acuerdos con relación a la generación, distribución y destino de los recursos públicos.

Entre las diferentes ventajas de incorporar a la sociedad en los acuerdos del Pacto Fiscal se destaca que su participación permitiría fortalecer la conciencia tributaria y la conexión entre el esfuerzo por tributar y los beneficios de los bienes y servicios públicos que se reciben.

Por otro lado, el Pacto Fiscal es un proceso que se puede atar por los diferentes intereses políticos de actores circunstanciales de los diferentes niveles de Gobierno, por lo que la participación de la sociedad podría viabilizar el tratamiento de temas delicados y políticamente difíciles, como la distribución, en un rol de coadyuvar a concertar el bien común y sobreponer las necesidades reales por encima de los intereses particulares.

Otros temas que también deberían ser abordados en el Pacto Fiscal son: la generación y uso de la renta extractiva, la creación de fondos de estabilización, la vigencia de la Ley SAFCO, los límites de gastos de funcionamiento y nuevas reglas fiscales, y otros de interés colectivo que sean formulados por los diversos actores del país.

PARA DEBATIR

Si bien se tiene una metodología aprobada, un reglamento de debates e incluso el cronograma; los temas que hacen al Pacto Fiscal como la distribución de los recursos o los impuestos son bastante delicados y políticamente muy difíciles de tratar y resolver, por lo que su verdadera realización implica un gran desafío.

Asimismo, el Pacto Fiscal ha sido finalmente activado a raíz de la preocupación por la disminución de los ingresos de los diferentes niveles de gobierno; sin embargo, el tratamiento de temas fiscales en un contexto con ingresos disminuidos y déficit fiscal puede ser más complicado.

En este sentido, si el debate del Pacto Fiscal es llevado adelante desde una discusión puramente política, posiblemente no se lleguen a acuerdos, mientras que orientarlo desde un enfoque técnico y con participación podría más bien permitir su viabilidad y que se puedan alcanzar resultados.

Este proceso significa una oportunidad para resolver temas estructurales y encaminar la gestión pública hacia un horizonte de desarrollo más sostenible y equitativo, lo que depende de una actitud abierta y propositiva en los actores involucrados y que prevalezca el bien común por encima de los intereses partidarios y sectoriales.



Jóvenes de ESFORDD aplican proyectos de inclusión, equidad de género y servicios con calidad

La participación y el protagonismo juvenil como instrumentos para la gestión y desarrollo local en los departamentos de La Paz, Santa Cruz, Tarija y Sucre se ha constituido en una de las experiencias de incidencia político-social de la Escuela de Formación para la Democracia y el Desarrollo (Esfordd), iniciativa que impulsan Fundación Jubileo y Fundación Hanns Seidel, desde el año 2014.

Durante la gestión 2015 se ha impulsado el rol protagónico de los y las jóvenes como un proceso gradual que ha fortalecido sus capacidades, tanto para el análisis crítico en temas de derechos, gestión pública, desarrollo local y herramientas para el manejo de conflictos, como en capacidades de organización, participación, toma de decisiones y proyección en los gobiernos locales universitarios y en temas municipales, propuestos por estudiantes de la Esfordd.

El marco metodológico que ha sustentado los planes de incidencia se enmarcó en el análisis de su realidad. Los estudiantes organizaron y establecieron alianzas con el objetivo de proponer e implementar soluciones a los problemas identificados.

En esta oportunidad se aplicaron 26 planes de incidencia de los cuales se destacan:

- Temas sociales (Educación, salud y alimentación)
- Temas económicos y de inclusión presupuestaria
- Temas de gestión en el área local municipal y universitaria

Estos planes de incidencia contribuyen a:

- a) Incentivar nuevas formas de empoderamiento juvenil a partir de su participación e impulso en planes de incidencia política.
- b) Creación de alianzas institucionales entre la universidad y los municipios a través de sus sociedades científicas y comités impulsores en procesos de incidencia política externos a las actividades académicas universitarias.
- c) Impulso al desarrollo de investigación científica en pregrado, en las universidades del Estado en Santa Cruz y Tarija, a través de la incorporación presupuestaria y programas de incentivo que fortalecerán y contribuirán a la mejora de la calidad educativa universitaria.
- d) Incorporaciones de paridad y alternancia de género, tanto en los Centros de Estudiantes, así como en las elecciones de docentes universitarios en Sucre.
- e) Estrategias para la participación en el proceso de elaboración y aprobación de leyes y reglamentaciones para jóvenes.
- f) Incidencia de la participación juvenil en leyes municipales y en el seguimiento al cumplimiento rompiendo estructuras convencionales y otorgando a los y las jóvenes un rol decisivo en la aplicación de normativas que los favorezcan.





Al Control Social le falta dar pasos hacia una mayor participación ciudadana

La Ley de Participación y Control Social del municipio de La Paz cumple en noviembre tres años de vigencia. La norma es un avance y referente en la democracia participativa; pero, como en otros municipios del país, aún tiene entre los principales desafíos la disposición de ampliar los espacios de participación a nuevos actores, la superación de la lógica de las obras y la construcción de un modelo de gestión participativa.

La Ley Municipal 025 y la reglamentación que impulsa la participación y control social en la jurisdicción municipal paceña motivó la realización de un estudio independiente de sistematización que está en curso.

Desde Fundación Jubileo, entidad que participó en el impulso de la norma y en procesos de consulta ciudadana para la concertación, ésta es una experiencia que favorece la transparencia en la gestión pública y el involucramiento de la sociedad civil.

FISCALIZACIÓN O CONTROL SOCIAL

Es recomendable continuar con la explicación de las diferencias entre fiscalización y control social, conceptos que suelen asumirse como similares.

La fiscalización, dependiendo si es a la gestión municipal, departamental o nacional, compete a autoridades o servidores públicos como concejos municipales, asambleas legislativas, Contraloría del Estado, Fiscalía, o responsables de entidades anticorrupción; mientras que el control social corresponde a representantes de la sociedad civil para cumplir tareas de vigilancia, propuesta ciudadana, evaluación y, en su caso, denuncia, entre otros roles.

En la primera fase de elaboración del anteproyecto de Ley Municipal de Participación y Control Social (LPyCS) se realizaron varios talleres de ca-

pacitación con dirigentes y representantes de las organizaciones sociales territoriales (juntas de vecinos y comunidades campesinas), sectoriales (educación, salud, producción, cultura y otros) y funcionales (jóvenes, niños/as, tercera edad, mujeres, personas con discapacidad y otros).

No obstante, aún hay confusión no sólo de algunos operadores de control social, sino también de servidores públicos; por tanto, es aconsejable esta capacitación y orientación a ambos actores.

Por otra parte, todavía quedan posiciones afines a la reserva y secretismo desde servidores públicos frente al rol del control social.

INTERESES

En algunos casos, se ha advertido la resistencia de representantes tradicionales del control social a la inclusión de nuevos actores sociales.

La Constitución menciona que la participación y el control social son un derecho de la sociedad civil organizada, y la Ley nacional 341, en el artículo 6, establece que no debe existir ningún tipo de discriminación para su ejercicio. Éste fue un tema muy debatido y resistido por los actores tradicionales del control social, como son las juntas de vecinos.

La primera ley de Participación Popular (Ley 1551), del año 1994, creó los comités de vigilancia en el ámbito municipal, cuando reconoció como actores privilegiados de ejercicio del control social a las Organizaciones Territoriales de Base (OTB), representadas por juntas vecinales y comunidades campesinas. La nueva normativa establece un cambio fundamental y menciona que es la sociedad civil organizada la que puede ejercer el derecho colectivo de la participación y el control social.

En ese sentido, el estudio identifica dos momentos críticos donde se manifiesta esta resistencia a la inclusión de otros actores sociales y, en

especial, a la pérdida de espacios de influencia en la toma de decisiones en la instancia de control social:

El primer antecedente fue durante la elaboración del Reglamento de la Ley Municipal 025 donde hubo un momento de paralización y rechazo de las juntas de vecinos a la distribución de espacios de representación en la instancia de control social, donde se incluía, con igual capacidad de representación, a actores sectoriales y funcionales. Después de varios meses, la situación fue solucionada otorgando la presidencia de la instancia de control social a las organizaciones territoriales.

El segundo momento fue el año 2015, el mismo que aún no ha sido resuelto, cuando los actores territoriales (juntas de vecinos) impulsaron una reforma del Reglamento de la Ley Municipal de PyCS solicitando mayores espacios de representación para las organizaciones territoriales, justificando que se encuentran en desventaja en la toma de decisiones al interior de la instancia de control social frente a los otros actores (sectoriales y funcionales).

La experiencia del comité de vigilancia ha marcado una “cultura de participación política” para las juntas de vecinos, las mismas que no han comprendido el nuevo enfoque cualitativo de la participación y control social y se resisten a perder influencia en un espacio importante en la relación entre la gestión municipal y la sociedad civil.

CAMBIOS LENTOS

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), a través de un estudio de seguimiento a indicadores sobre participación ciudadana, realizado el 2014, reflejó dos datos:

33% de la población paceña dijo conocer de la existencia de la Ley Municipal de Participación y Control Social

Respecto a si conoce a algún representante del control social, 25% respondió que sí.

Si bien son datos más alentadores que en el pasado, este panorama no ha mejorado mucho. La crítica principal a los anteriores representantes de los comités de vigilancia señalaban el desconocimiento de sus acciones y la falta de participación de otros actores sociales.

Se podía pensar que al ser una nueva normativa y un tema tan importante como el control social, el conocimiento tanto de la ley, de la instancia y representantes del control social iban a ser más amplios; pero los datos muestran que si no hay una acción decidida desde la institucionalidad de la gestión pública como de las dirigencias sociales, este indicador sobre el poco conocimiento de la normativa y los actores del control social puede mantenerse invariable.

NUEVOS ACTORES Y RETOS

Al ser el control social un actor importante para la transparencia y legitimidad de la gestión pública, este espacio genera atención de agrupaciones y partidos políticos. Un aspecto a rescatar del proceso de elaboración de la Ley Municipal de PyCS fue que a partir de la inclusión de nuevas voces en la mesa de diálogo, por ejemplo en el Comité Impulsor, la ley municipal permitió generar propuestas desde la opinión de diversos actores sociales interesados en incluirse en el debate sobre la gestión del municipio.

En el ejercicio del control social, en diversos municipios del país, todavía se advierte que prevalece la lógica de priorizar las obras, concentrando el rol del control social a la formulación de demandas, la mayoría sobre infraestructura, y al seguimiento a proyectos para los barrios.

En algunos municipios se han conformado instancias de participación de la sociedad civil para cumplir con la elaboración de la planificación municipal y la rendición pública de cuentas.

APOYO TÉCNICO

Llegar al hito de la aprobación participativa de una norma no es suficiente. Queda por delante la capacitación y cualificación para un adecuado ejercicio del control social, en concordancia con lo resuelto en la Constitución Política del Estado.

En ese camino se necesita el acompañamiento cercano de instituciones y organizaciones dedicadas al fortalecimiento de la democracia participativa, para lograr avanzar a un mayor ejercicio de derechos de las organizaciones sociales, en especial de aquellas que aún no están incluidas en estos espacios de control social.

En los avances de la sistematización realizada por el municipio se menciona que “el rol de la Fundación (Jubileo) fue decisivo en el sentido de ejercer funciones mediadoras en todo el proceso entre el GAMLP y la sociedad civil organizada, elemento que permitió legitimar las decisiones de los actores”.

También se subraya que “la Ley 025 representa el éxito de la capacidad de consenso de los actores sociales y su situación actual, los paradigmas culturales que solo cambian con un intenso y permanente seguimiento institucional”.

Desde esta experiencia es posible pensar en el desarrollo de propuestas de normativa que permitan consolidar un modelo de gestión participativa, donde actores sociales, servidores públicos e instituciones puedan lograr resultados bajo el criterio del bien común.





Más de 50 parroquias y centros católicos son puntos de acopio de pilas y baterías

Las pilas y baterías de aparatos electrónicos pueden ser peligrosas si no tienen un adecuado cuidado y disposición final después de usarlas, porque son causantes de graves consecuencias para la salud humana y el medio ambiente.

La Iglesia Católica y el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) acordaron una alianza para mitigar los daños provocados por residuos metálicos a través de la campaña denominada: "Ponte las pilas para no contaminar".

La acción es impulsada por el Sistema de Regulación Municipal (SIREMU) y personal de Gestión Ambiental del municipio paceño, encargados de la asistencia técnica y del recojo y depósito final de estos materiales.

El Arzobispado de La Paz, Fundación Jubileo y la Comisión de Hermandad de la iglesia alemana son impulsores de la articulación con parroquias, centros educativos y obras de la Iglesia Católica para constituirse en centros de acopio de pilas y baterías, en La Paz.

Más de 50 recintos católicos están comprometidos en la acción de cuidado de la Casa Común y esos puntos se seguirán ampliando por la ciudad.

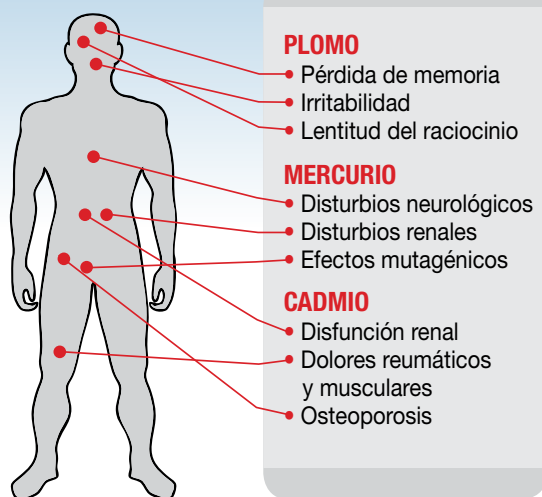
Los botellones de la campaña fueron gentilmente donados por la embotelladora La Cascada, en el marco de una acción de responsabilidad social empresarial.

¿POR QUÉ LAS PILAS SON PELIGROSAS?

Cuando una pila o batería pierde su cubierta protectora libera diferentes tipos de metales pesados. Estos elementos no llegan directamente al organismo humano, pero consiguen hacerlo a través del aire, el agua y la tierra.

Respirar, beber líquidos o alimentarse pueden ser las vías para ingerir mercurio, plomo, cadmio y otros compuestos.

La ingesta de estos compuestos en cantidades excedentes provoca pérdida de memoria, irritabilidad, disturbios neurológicos, afectación a los riñones, Dolores reumáticos y musculares, varios de estos síntomas son también señales de enfermedades críticas.



EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN

La Iglesia Católica en Bolivia desarrolla acciones orientadas a impulsar medidas de mitigación frente al cambio climático. Uno de sus insumos orientadores es la encíclica del Papa Francisco, *Laudato Si* (2015), sobre el Cuidado de la Casa Común, documento analítico y reflexivo sobre las consecuencias del modelo de vida y de consumo.

En Bolivia, los Obispos aportaron, en 2012, con otro documento, “El Universo, Don de Dios para la Vida, Carta pastoral sobre desarrollo y medio ambiente”, recogiendo datos, investigaciones y testimonios de distintas instancias de la Iglesia y desde diversas regiones del país. De más antigua data son las cartas pastorales sobre Tierra y Agua. Todos estos documentos reflejan un compromiso constante con el medio ambiente y el desarrollo humano.

La campaña de recojo de pilas, fortaleciendo la sensibilización, concienciación y compromiso de los habitantes de la ciudad sobre la responsabilidad que implica el adecuado desecho de material nocivo para el medio ambiente, forma parte de la voluntad de pasar de la reflexión a la acción concreta.



No botar las pilas a la basura común
No tirar al agua (desagües, sumideros, ríos)
No quemar
No mezclar pilas usadas con nuevas
No dejar al alcance de los niños
Si no es posible evitarlas, use pilas recargables





TARIJA RECIBIÓ \$US 3.800 MILLONES POR REGALÍAS E IDH ENTRE 2005–2014

Los recursos fiscales provenientes de la explotación de hidrocarburos para Tarija suman \$us 3.800 millones durante el periodo 2005-2014. Éstos se utilizaron principalmente en desarrollo de infraestructura caminera, fomento a la producción agropecuaria —incluye la transferencia en dinero bajo el programa PROSOL—, infraestructura urbana y rural, además de educación, salud, saneamiento básico y apoyo al cuidado del medio ambiente.

Un tema importante en el análisis es la sostenibilidad y fragilidad de los avances alcanzados, consi-

derando la elevada volatilidad de los ingresos fiscales provenientes del sector, debido a variaciones en los precios internacionales del petróleo.

El estudio pone en evidencia la falta de planificación del desarrollo tarijeño, tanto para el ámbito departamental como municipal; la falta de concertación y de búsqueda de un sueño colectivo para sus comunidades, municipios y departamento; la carencia de un control social efectivo que vigile la eficiencia y la transparencia del gasto público y de la intervención económica de las empresas petroleras en comunidades y municipios.



CATÁLOGO DE COMPETENCIAS POR NIVELES DE GOBIERNO

Fundación Jubileo elaboró este documento para orientar tanto a la población como a autoridades públicas sobre las competencias que le corresponden a cada nivel de gobierno, en el actual marco normativo.



PROPUESTAS PARA UN NUEVO CONTEXTO ECONÓMICO

Diferentes indicadores registran cifras que ya no son favorables para el país como en el pasado.

Fundación Jubileo recabó análisis y propuestas de destacados especialistas con la finalidad de contribuir al debate público.

BOLIVIA IMPORTA ALIMENTOS POR \$US 50 MILLONES CADA MES

Hasta el año 2015, la importación de alimentos y bebidas se incrementó en 146%, en comparación a 2006. La importación de alimentos provenientes de China subió en 2.113% en menos de una década.



SEMILLAS PARA CUIDAR LA CREACIÓN. GUÍA PARA APLICAR LA LAUDATO SÍ

Cuidar la casa común es el llamado del Papa Francisco en la encíclica Laudato Si. El documento reflexiona sobre el modelo de vida y de consumo y la guía promueve cambios globales, nacionales y personales.



www.jubileobolivia.org.bo

Director Ejecutivo:

Juan Carlos Núñez Vidaurre

Coordinador General:

Waldo Gómez R.

Responsable de edición:

Jorge Jiménez Jemio

Dirección:

La Paz, Bolivia

Edif. Esperanza

Av. Mcal. Santa Cruz 2150, Piso 2

Telf: (591-2) 2125177 – 2311074

Equipo técnico:

René Martínez

Raúl Velásquez

Patricia Miranda

Jaime Pérez

Herbert Irahola

Héctor Córdova

Sandra Sánchez

Wilson Gisbert

María Eugenia Rivera

Administración:

Mirian Clavijo

Olga Machicado

Raquel Ortuño

Bladimir Herrera

Cecilia Rocabado

Muriel Pérez

Publicación con apoyo de

KZE-Misereor Alemania

D.L. 4-3-61-12



En esta publicación se usó papel reciclado para evitar la destrucción de árboles.



Fundacion Jubileo

fundajub@entelnet.bo



@JubileoBolivia